

*“Ninguna mujer debería pagar con su dignidad o su vida por ejercer sus derechos políticos”<sup>1</sup>*

## **LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS ELECTORALES, VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS.**

ADRIANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ.<sup>2</sup>

### **INTRODUCCIÓN.**

A lo largo de la historia las mujeres han tenido que luchar por obtener un lugar de respeto e inclusión digno dentro de la sociedad, ya que se han enfrentado a un fenómeno de discriminación estructural de sus derechos, por medio del cual, les han sido negados o reducidos sus derechos por razones de género, ya que se le han asignado roles que deben cumplir sobre la base de estereotipos; ello ha traído como consecuencia que se ejerza violencia contra ellas.

Cuando se habla de violencia contra las mujeres, muchos pensamos inmediatamente en la violencia física, sin embargo no es el único tipo de violencia que se ejerce sobre ellas, además se pueden presentar la violencia sexual, psicológica, económica, y un tipo de violencia del cual no se habla o en ocasiones se piensa que no existe como lo es la violencia política. Estas acciones u omisiones se interrelacionan, afectan la vida y obstaculizan el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Existe además una agravante, cuando además de ser violencia, o de presentarse específicamente la violencia política, se da esta en razón de género, es decir se perpetúan actos con el fin de causar un menoscabo en la integridad física o psicológica por el simple hecho de ser mujer.

Por lo que considero importante tratar el tema de violencia política contra las mujeres, ya que esta disminuye su capacidad para participar en la vida pública, es un tipo de violencia que comienza a ser visible para la sociedad. En el informe de las Naciones Unidas, sobre violencia contra las mujeres, se estableció que “las raíces de la violencia contra la mujer yacen en la discriminación persistente contra las mujeres” es decir este tipo de violencia no se ejerce sobre una población

---

<sup>1</sup> Declaración de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres Phumzile Mlambo-Ngcuka, sobre el asesinato de Lesbia Yaneth y Jo Cox. Disponible en: <http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/7/ed-statement-on-killing-of-lesbia-yaneth-and-jo-cox>

<sup>2</sup> Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, [adriana.heram@gmail.com](mailto:adriana.heram@gmail.com).

especifica de mujeres, se trata de un contexto generalizado, basado en una supuesta superioridad de los hombres.

Palabras Clave: violencia política, Violencia política, derechos políticos, derechos humanos.

Las presentes reflexiones pretenden desvelar los mitos y las teorías que se han creado alrededor de la diferenciación que se da a la mujer y al hombre en la sociedad, partiendo como lo establece Pierre Bourdieu de “la dominación masculina”.<sup>3</sup>

En las siguientes líneas se podrá observar la concepción que se ha tenido de la mujer, dentro de una sociedad androcéntrica, confesional, estructurada y encasillada en un rol que les ha sido asignado y que deben cumplir a cabalidad para situarse en el plano de normalidad del que nos habla Michael Foucault.

Bourdieu, habla de la *paradoja de la doxa*, estableciendo “el hecho de que la realidad del orden del mundo, con sus sentidos únicos y sus direcciones prohibidas, en el sentido literal o metafórico, sus obligaciones y sus sanciones, sea grosso modo respetado, o más sorprendente todavía que el orden establecido, con sus relaciones de dominación, sus derechos y sus atropellos, sus privilegios y sus injusticias, se perpetúen, en definitiva con tanta facilidad, aparecen tan a menudo como aceptables por no decir naturales”.<sup>4</sup> Podríamos acaso considerar que la dominación de un sexo sobre otro, que la violencia ejercida surgió por generación espontánea, o quizá que esta ha sido tolerada porque la sociedad así lo ha impuesto, ¿cómo surge esta dominación? y cómo se instaura en la conciencia de una sociedad para adquirir su aceptación y aprobación.

Entonces, cómo se explica el surgimiento de la violencia, a tal grado de pasar inadvertida, de ser invisible incluso para sus propias víctimas, esta se entiende a partir del surgimiento de una relación social que se establece a raíz de la dominación, como un estilo de vida, habitual a la cual se le da un significado distintivo, se coloca entonces lo masculino por encima de lo femenino, se llega a tal nivel de dominación que podríamos hablar entonces de un “poder hipnótico de la dominación” como lo nombra Virginia Woolf, relacionando genéticamente la segregación de las mujeres con los rituales de una sociedad arcaica “Inevitablemente, vemos la sociedad como un lugar de conspiración que engulle al hermano que muchos de nosotros tendrían razones para respetar la vida privada, e imponernos en su lugar un macho monstruoso, con una voz estruendosa, con mano dura, que, de una manera pueril, anota en el suelo signos con tiza, líneas de separación mágicas entre las cuales aparecen, hieráticos, rígidos, separados y artificiales los seres humanos. Él disfruta de los dudosos placeres del poder y del domino, mientras que nosotras “sus” mujeres permanecemos encerradas en la

---

<sup>3</sup> Bourdieu, Pierre, “La dominación masculina” Editorial Anagrama, Barcelona España, 1999, pág. 45.

<sup>4</sup> Ibídem.

vivienda familiar, sin que nos permita participar en ninguno de los numerosos hechos sociales que componen a la sociedad”.

La autora narra el surgimiento de esa dominación, con tantos elementos que definirán en adelante al hombre y a la mujer en la sociedad, esa asimetría que se presenta para cada uno de ellos y los roles que deberá cumplir, ello da paso a la división de sexos, a partir de las diferencias biológicas, la diferencia en los cuerpos y las mentes, y la diferenciación sexual.

En la historia de la sexualidad Michael Foucault explica que partir de la edad clásica la represión ha sido, el modo fundamental de relación entre poder, saber y sexualidad, señala que por ello, no es posible liberarse sino a un precio considerable: haría falta nada menos que una trasgresión de las leyes, una anulación de las prohibiciones, una irrupción de la palabra, una restitución del placer a lo real y toda una nueva economía en los mecanismos del poder; pues el menor fragmento de verdad está sujeto a condición política.

“A ese día luminoso habría seguido un rápido crepúsculo hasta llegar a las noches monótonas de la burguesía victoriana. Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada. Se muda. La familia conyugal la confisca. Y la absorbe por entero en la seriedad de la función reproductora. En torno al sexo, silencio. Dicta la ley la pareja legítima y procreadora. Se impone como modelo, hace valer la norma, detenta la verdad, retiene el derecho de hablar —reservándose el principio del secreto. Tanto en el espacio social como en el corazón de cada hogar existe un único lugar de sexualidad reconocida, utilitaria y fecunda: la alcoba de los padres. El resto no tiene más que esfumarse; la conveniencia de las actitudes esquivo los cuerpos, la decencia de las palabras blanquea los discursos. Y el estéril, si insiste y se muestra demasiado, vira a lo anormal: recibirá la condición de tal y deberá pagar las correspondientes sanciones”<sup>5</sup>.

En el siglo XVIII, una de las grandes novedades en las técnicas del poder fue el surgimiento, como problema económico y político, de la "población": la población-riqueza, la población-mano de obra o capacidad de trabajo, la población en equilibrio entre su propio crecimiento y los recursos de que dispone. Los gobiernos advierten que no tienen que vérselas con individuos simplemente, ni siquiera con un "pueblo", sino con una "población" y sus fenómenos específicos, sus variables propias: natalidad, morbilidad, duración de la vida, fecundidad, estado de salud, frecuencia de enfermedades, formas de alimentación y de vivienda. Todas esas variables se hallan en la encrucijada de los movimientos propios de la vida y de los efectos particulares de las instituciones: "Los Estados no se pueblan según la progresión natural de la propagación, sino en razón de su industria, de sus producciones y de

---

<sup>5</sup> Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, la voluntad del saber, Siglo XXI, 1998, pág. 30.

las distintas instituciones... Los hombres se multiplican como las producciones del suelo y en proporción con las ventajas y recursos que encuentran en sus trabajos"<sup>6</sup>.

En el corazón de este problema económico y político de la población, el sexo: hay que analizar la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los nacimientos legítimos e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las relaciones sexuales, la manera de tornarlas fecundas o estériles, el efecto del celibato o de las prohibiciones, la incidencia de las prácticas anticonceptivas esos famosos "secretos funestos" que según saben los demógrafos, en vísperas de la Revolución, son ya corrientes en el campo. Por cierto, hacía mucho tiempo que se afirmaba que un país debía estar poblado si quería ser rico y poderoso. Pero es la primera vez que, al menos de una manera constante, una sociedad afirma que su futuro y su fortuna están ligados no sólo al número y virtud de sus ciudadanos, no sólo a las reglas de sus matrimonios y a la organización de las familias, sino también a la manera en que cada cual hace uso de su sexo.

Se da una construcción social de los cuerpos, el orden de la sexualidad y el tratamiento del cuerpo socializado identificando ciertos rasgos como la fuerza y la virilidad con el hombre y la debilidad con la mujer. Además señalan diversos autores la parte de la sexualidad la cual se presenta como una relación social de dominación, señala Bourdieu que esta se construye a través del principio de una división fundamental entre lo masculino activo y lo femenino pasivo, por ello existe un deseo de posesión y un deseo de dominación.

Se crea así un pensamiento y categorías de entendimiento que se reproducen que se alojan en la conciencia de cada uno de nosotros, creando así estructuras que den protección a este pensamiento, a través de la aprobación de diversas ciencias, la medicina, la psicología, la creación de diversas instituciones lograron que esa dominación permaneciera a través de discursos y practicas naturalmente aceptadas.

Es así que "la fuerza del orden masculino se descubre en el hecho de que prescinde de cualquier justificación, la visión androcéntrica se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse en unos discursos capaces de legitimarla. El orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación masculina en la que se apoya: es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento, sus instrumentos, es la estructura del espacio, con la oposición entre el lugar de reunión o el mercado, reservado a los hombres y la casa reservada a las mujeres".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibídem.

<sup>7</sup> Bourdieu, Pierre, "La dominación masculina" Editorial Anagrama, Barcelona España, 1999, pág. 45.

La división del trabajo se inserta como un factor que definiría la relación arbitraria que se da tanto al hombre como a la mujer, y posteriormente la dominación de los primeros sobre las mujeres.

Todos estos aspectos de la socialización, impone un pensamiento de superioridad e impone límites al que es considerado el sexo débil, se impone una moral a la parte femenina que controla su actuar y pensar, que van desde el modo de vestirse, el peinado, la forma de comportarse, de reír, se le dice que debe ser sumisa, dócil para ser una buena mujer.

Es así que al estar simbólicamente destinadas a la resignación, las mujeres solo pueden ejercer algún poder dirigiendo contra el fuerte su propia fuerza o accediendo a difuminarse y en cualquier caso, negar un poder que ellas sólo pueden ejercer por delegación.<sup>8</sup>

Por lo que al prevalecer esta situación, las mujeres se vuelven incapaces de revertir o combatir esta situación, porque esta dominación se construye a partir de las prohibiciones impuestas, lo que provoca transgresiones, especialmente formas de violencia como la física, psicológica, simbólica.

Cómo pudieron entonces y pueden ahora las mujeres, liberarse de esa dominación, hará falta la toma de conciencia, es decir que la mujer se haga responsable de su propia opresión, no asumirse como víctimas y con ello contribuir a la reproducción de esa dominación. Sin embargo una vez que se logra hacer visible esta situación, se alzan las voces y a través de la presión son abolidas y se instauran algunas libertades formales – derecho al voto, derecho a la educación, acceso a todas las profesiones, incluso las políticas– sin embargo surge la autoexclusión y la exclusión expresa. Una vez logrado esto se presenta otro problema, lograr el ejercicio efectivo de estos derechos.

Las mujeres han buscado a partir de la agrupación, trabajar e impulsar un cambio para acabar con la violencia y la discriminación que aún existe en esta sociedad.

Para la deconstrucción de ciertos paradigmas se hace necesaria la movilización y esta será principalmente política, que debe tener como objetivo abrir paso a las mujeres, dando la oportunidad de acción, de resistencia y que buscara forzosamente un cambio de paradigma que permee en reformas de jurídicas y políticas, orientadas a la reasignación de roles y con ello acabar con las visiones históricas de prohibición, con las teorías biológicas y psicoanalíticas que ponen sobre una balanza superior a un sexo antes que a otro.

---

<sup>8</sup> Ídem pág. 47

## **CONCEPTO DE VIOLENCIA.**

La violencia constituye un acto que lesiona la integridad tanto física como psicológica de la víctima, la cual constituye un obstáculo para el establecimiento de un entorno seguro, tanto para la víctima, como para las personas que habitan alrededor de esta. Hablar de violencia en razón de género, es referirse a todos aquellos actos de violencia cometidos en el marco de las relaciones desiguales existentes entre hombres y mujeres.

Para comprender este tipo de violencia, conviene partir retomando la definición que se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, del 20 de Diciembre de 1993 que a la letra dice: “[...] se entiende todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Por su parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU explica que la violencia contra la mujer en México sólo puede entenderse en el contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”. La Relatora se refirió a “fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases mismas del machismo”, entre las que incluyó la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, lo cual proporciona independencia económica y ofrece nuevas oportunidades de formarse. Estos factores, aunque a la larga permitan a las mujeres superar la discriminación estructural, pueden exacerbar la violencia y el sufrimiento a corto plazo. La incapacidad de los hombres para desempeñar su papel tradicionalmente machista de proveedores de sustento conduce al abandono familiar, la inestabilidad en las relaciones o al alcoholismo, lo que a su vez hace más probable que se recurra a la violencia. Incluso los casos de violación y asesinato pueden interpretarse como intentos desesperados por aferrarse a normas discriminatorias que se ven superadas por las cambiantes condiciones socioeconómicas y el avance de los derechos humanos.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se establece que violencia, es cualquier acción u omisión, basada en el género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que “existe una estrecha relación entre violencia, discriminación y subordinación” y que “[l]as actitudes tradicionales conforme a las cuales la mujer es considerada subordinada del hombre o conforme a las que se considera que tiene funciones

estereotipadas, perpetúan prácticas difundidas que comportan violencia o coerción, como la violencia”.<sup>9</sup>

La violencia de género se constituye a partir de actos violentos en contra de la integridad, la libertad y la identidad sexual de las mujeres, en cualquier etapa de su vida que tenga como fin limitar su libertad, o mantenerla en una posición de sometimiento, es decir se busca causar un daño físico, psicológico, económico, ya sea en el espacio privado o público.

Estos actos principalmente son ocasionados por hombres sobre mujeres ya que ejercen el poder patriarcal, que representan, además de ser avalado en un contexto familiar e institucional.

## **TIPOS DE VIOLENCIA.**

Cuando se habla de violencia contra las mujeres, muchos pensamos inmediatamente en la violencia física, sin embargo esta se presenta y se ejerce en diversas formas, pero que se entiende por violencia existe un solo tipo de violencia.

En primer lugar se hace referencia a la violencia física que se entiende como las acciones u omisiones que den como resultado el daño, el sufrimiento ocasionadas por el hombre sobre la mujer<sup>10</sup>, y esta principalmente se representa a través de rasgos exteriores, como alteraciones en el cuerpo físico, entre ellas moretones, rasguños, quemaduras, estas pueden aumentar en grado de dolor llevando a causar la muerte de la víctima.

La violencia sexual, está asociada con actos u omisiones que atentan contra la libertad e identidad sexual de las mujeres, que no posean la capacidad volitiva o cognitiva que tiene como resultado el daño y limitación al ejercicio de su sexualidad<sup>11</sup>, por ejemplo el uso de anticonceptivos, la decisión de en qué momento tener relaciones sexuales etc.

La violencia psicológica, se trata de acciones u omisiones que tengan por objeto el menoscabo emocional, psicológico, mediante el uso de amenazas contra la mujer o familiares de la víctima, que buscan la intimidación, menoscabo de la autoestima, controlar sus acciones, lo cual ocasiona daños y debilitamiento a su salud mental.

La violencia económica, se presenta a través de actos u omisiones que buscan despojar o controlar a la víctima a través del uso y goce de bienes materiales, cuando estos pertenecen al vínculo matrimonial, se ejerce principalmente a través de la sustracción, destrucción, retención de objetos o documentos.

---

<sup>9</sup> Protocolo para Atender de la violencia política contra las Mujeres. Primera edición 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

<sup>10</sup> Ídem.

<sup>11</sup> Ídem.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, establece que se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

## **VIOLENCIA POLÍTICA.**

En el caso particular de la violencia política se manifiesta través de actos u omisiones hacia las mujeres que ejercen cargos de elección popular o alguna responsabilidad de tipo público o político, son precisamente las que sufren acciones de acoso y violencia que impactan tanto en el desarrollo de su vida política, además de implicar otras formas de violencia y causar un daño en su salud física y mental.

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones o aquiescencia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos políticos, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.<sup>12</sup>

Este tipo de violencia puede ser de distintos tipos entre ellos; política, económica, social, cultural, civil, puede presentarse en el seno de la familia, en la comunidad, en un partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado.

La violencia política se ejerce por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación o puede cometerla cualquier persona o grupo de personas.

Este tipo de violencia al cual se cataloga de manera específica, impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes

---

<sup>12</sup> Protocolo para Atender de la violencia política contra las Mujeres. Primera edición 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

También afecta a aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las mesas directivas de casilla. Pero además se agrava en el contexto de mujeres indígenas que quieren ejercer sus derechos políticos, sobre todo cuando quieren acceder a ser representantes de sus comunidades. La violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género.

El sexo y el género conviven, además del contexto, con otras categorías que pueden profundizar y agravar los efectos de la violencia. Por ello, debe tomarse en cuenta el elemento de interseccionalidad,<sup>53</sup> es decir, si se trata de mujeres embarazadas, con discapacidad, transexuales o transgénero, indígenas, adultas mayores, etcétera. Esto implicará repercusiones distintas para cada víctima y, por tanto, demandará una actuación particular de las autoridades. En efecto, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres se “complica” cuando, por ejemplo, se trata de mujeres indígenas, que no hablan español y que pertenecen a una religión minoritaria; o cuando se trata de personas transexuales que, incluso, pueden no contar con un documento oficial de identidad.<sup>13</sup>

Se ha tratado de dar solución a este tipo de violencia a partir de diversos mecanismos que incluyen por ejemplo en el caso de que en el registro de candidaturas no se respete el principio de paridad y no se cumplan los requerimientos respectivos, el Consejo General del INE procederá a la negativa del registro de las candidaturas correspondientes. También se prevé que el INE generará un registro público sistemático de los procedimientos que se hayan instaurado y resuelto por violencia política de género.

En el caso de la violencia política por razones de género, dentro del procedimiento ordinario sancionador podría, en su caso, decretarse medidas cautelares cuya tutela exija un análisis materialmente jurisdiccional, con la finalidad de que cesen las conductas presuntamente constitutivas de violencia política y evitar daños irreparables.

Otro procedimiento que permite que la atención y sanción de la violencia política en contra de las mujeres, es el que se instaura en materia de fiscalización. Procedimiento sancionador en materia de fiscalización Este procedimiento se enfoca a la tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos en materia de fiscalización, entendiéndose como tal, las quejas, denuncias o procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de los recursos

---

<sup>13</sup> Proyecto de Recomendación general N° 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 16 de diciembre de 2010.

derivados del financiamiento de los sujetos obligados. Tales procedimientos deben resolverse con perspectiva de género, visibilizando, atendiendo y sancionando, en caso de darse, la violencia política en contra de las mujeres.

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que aunque podría presentarse asuntos que se ventilan en diferentes procesos, la vía más adecuada para impugnar la violencia política en contra de las mujeres es el juicio para la protección de los derechos político-electorales, medio constitucional idóneo para la defensa de esos derechos.

## **MARCO JURÍDICO.**

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.

Desde la aprobación en 1952 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer no ha cejado el interés por los derechos fundamentales de la mujer en cuanto a su participación en la vida política. De ahí que disposiciones sobre este particular se incluyan en diversas convenciones, que buscan garantizar a la mujer el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas.

El tema de violencia contra la mujer ha ocupado importantes discusiones en el seno de organismos nacionales e internacionales, al ser un tema de gran importancia, se ha establecido en diversas legislaciones medidas para visibilizarla y erradicarla, es así que se encuentra regulada en la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), aprobada en el seno de la ONU el 18 de diciembre de 1979, reconoce explícitamente que "las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana". Según el artículo 1, por discriminación se entiende "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo [...] en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera". La Convención afirma positivamente el principio de igualdad al pedir a los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre" (artículo 3).

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), establece que "que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente

desiguales entre mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además, señala que la violencia contra las mujeres, trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.”

También encontramos referencia del tema en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se protege el principio de igualdad, el derecho de todos los y las ciudadanas de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

En el ámbito interno la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

En su artículo 2, la Constitución “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para [...] decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”. En la fracción III, protege su derecho a: “elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.” Además, agrega que “[...] las prácticas comunitarias no podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.”

La fracción I del artículo 41 constitucional, determina que, entre los fines de los partidos políticos, se encuentran el de promover la participación en la vida democrática y posibilitar el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con la paridad.

En el mismo sentido, el artículo 7, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) determina que es un derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular.

En el caso particular de los pueblos y comunidades indígenas en las entidades federativas establece que elegirán de acuerdo con sus principios, normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de hombres y mujeres en condiciones de igualdad, guardando las normas establecidas en la Constitución, las constituciones locales y las leyes aplicables.

En el artículo 442 de la LEGIPE se determina quiénes son los sujetos responsables por infracciones cometidas a las disposiciones electorales. Los casos de violencia política atentan contra lo establecido por la Constitución, los tratados internacionales y la Ley General mencionada, por ello, los sujetos citados en dicho artículo pueden incurrir en responsabilidad electoral por casos de violencia política: los partidos políticos; las agrupaciones políticas; las y los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatas independientes a cargos de elección popular; los y las ciudadanas, o cualquier persona física o moral; los y las observadoras electorales o las organizaciones de observadores y observadoras electorales; las autoridades o las y los servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Ciudad de México; órganos autónomos, y cualquier otro ente público; las y los notarios públicos; entre otros.

Sin embargo uno de los problemas que se pueden resaltar es que no existe en nuestra legislación una descripción específica de violencia política, por lo que sería conveniente que el Estado tipificara esta conducta como un ilícito tanto en sede administrativa y además como un tipo penal.

En este sentido, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas reconoce “la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas.”<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Protocolo para Atender de la violencia política contra las Mujeres. Primera edición 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## **CASOS EN LOS QUE SE HA PRESENTADO LA VIOLENCIA POLÍTICA:**

Actualmente, existen pocos casos documentados de violencia política contra las mujeres con elementos de género, esto sucede porque muchas veces se desconoce en qué casos se está hablando específicamente de violencia política, ya que no se cuenta con un soporte legal, además que continuamos en una sociedad en la que se asume como normal y hasta justificable la violencia que se ejerce contra las mujeres. Sin embargo estos casos han ido en aumento como lo señaló el titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo, aseguró que "cada día son más frecuentes los casos de violencia política hacia las mujeres, no sólo en esta ciudad sino en todo el país".<sup>15</sup>

Por lo que se refiere a casos de violencia política en contra de las mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales reportó 38 casos en dicho proceso electoral, ubicados en Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco. Debido a que no existe tipificación de la violencia política de género, las conductas que tuvieron lugar en dichos estados podrían actualizar dos de los tipos penales previstos en el artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales (LGMDE).<sup>16</sup>

Como ejemplos claros de estos actos de violencia política cometidos en contra de las mujeres, podemos enunciar los que siguen:

El cuatro de noviembre de dos mil siete, se llevaron a cabo las elecciones municipales del pueblo de Santa María Quiegolani, cuyo triunfo correspondió a Eufrosina Cruz Mendoza, contadora pública e indígena del último pueblo zapoteco de la sierra sur del estado de Oaxaca, quien ganara una presidencia municipal y cuyo nombramiento no fue aceptado en razón de su género.

La razón de este despojo electoral, se debe a que el pueblo de Santa María Quiegolani es uno de los 418 municipios oaxaqueños que eligen a sus autoridades bajo el amplio paraguas legal de los "usos y costumbres" que dictan que Quiegolani no puede ser gobernado por una mujer, "Y menos profesionista", como le dijo el síndico al momento de expulsarla de la asamblea en que se votaba al sucesor de Saúl Cruz Vázquez, presidente municipal entre 2004 y 2007.

El segundo caso es el que comúnmente conocemos como las "Juanitas", cuyo nombre alude al caso de Rafael Acosta, "Juanito", quien fuera el Jefe Delegacional electo en Iztapalapa y luego renunciara al cargo de elección popular para que Clara Brugada, a quien el Tribunal Electoral descartó como aspirante al cargo por irregularidades en su campaña, asumiera el cargo.

---

<sup>15</sup> <http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/09/19/aumentan-casos-de-violencia-politica-contra-mujeres-fepade>

<sup>16</sup> Ídem.

El caso de las diputadas denominadas como “Juanitas” consistió básicamente en la renuncia de ocho mujeres, en la primera sesión de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, hecho a partir del cual los suplentes de estas diputadas accedieron al cargo; pero con la particularidad de que en los ocho casos se trataba de hombres. Lo cual constituyó una vulneración al principio de las cuotas de género. A partir de lo anterior, es que el Consejo General del IFE (ahora INE) estableció, en el Acuerdo CG/327/2011, que ningún partido político o coalición incluiría más de 60% de candidatos propietarios a diputados y senadores de un mismo sexo del total de las solicitudes de registro de candidaturas, tanto en mayoría relativa, como en representación proporcional.

Las múltiples impugnaciones realizadas por los partidos políticos llevaron el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que emitió la sentencia SUP JDC 12624/2011 y acumulados, que representan uno de los más grandes avances en términos de igualdad de género en el México contemporáneo; la cual estipula cuestiones como el hecho de que los partidos políticos deben de presentar un mínimo de 120 candidatos a diputados y 26 candidatos a senadores propietarios del mismo sexo (para legisladores de mayoría relativa), y que por lo menos un 40% de la totalidad de las solicitudes de registros, sea de candidaturas con fórmulas completas (propietario y suplente) del mismo sexo.

Un ejemplo de violencia política dirigida a las mujeres por el hecho de serlo es el caso del Municipio San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca en el cual, en 2014, tuvieron lugar elecciones para presidencia municipal, regidurías y sindicaturas. En la Asamblea General Comunitaria no se permitió la postulación de mujeres en las ternas de candidaturas para la elección de la presidencia municipal y la sindicatura. Se argumentó que conforme al sistema normativo interno vigente, en la comunidad no se permitía la postulación de mujeres a esos cargos. El resultado fue que únicamente los hombres ocuparon los diez puestos disponibles. Después de que autoridades electorales —tanto administrativas como judiciales— declararon la validez de las elecciones a pesar de la discriminación en contra de las mujeres, la Sala Superior del TEPJF consideró que dichas autoridades no habían interpretado correctamente el principio de igualdad, que también debe observarse en las elecciones celebradas bajo los sistemas normativos indígenas y, por tanto, se había vulnerado el principio constitucional de la universalidad del sufragio y la participación política de las mujeres, por lo que se declaró la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento en dicho Municipio.

Un caso que evidencia que se excede el grado de aplicación de violencia en contra de las mujeres que buscan incursionar dentro de la vida política del país, y en este sentido, se trata de Evitelia Pacheco Ramírez, del municipio de San Juan Cotzocón en el estado de Oaxaca. Fue un 8 de mayo del 2011 que bajo la consigna: “¡Aquí en este pueblo mandamos los hombres!”, vecinos de la agencia municipal Emiliano Zapata, encabezados por un profesor, intentaron linchar a la tesorera Evitelia Pacheco. Durante el hecho, donde intentaron quemarla viva, fue exhibida desnuda

y finalmente encarcelada en una mazmorra; mientras que el profesor exclamaba: “¡Esta vieja no ha aprendido que en este pueblo mandamos los hombres!”. La desventura de Evitelia Pacheco y de sus compañeras Elia Castañeda Martínez y Marcelina Miguel Santiago comenzó el 2 de enero de ese mismo año, cuando ganaron la elección bajo el sistema tradicional indígena de usos y costumbres. La queja generalizada ha sido porque a esa localidad mixe nunca la ha gobernado una mujer.

El último y más reciente caso es el de Rosa Pérez Pérez, presidenta municipal de San Pedro Chenalhó [SUP-JDC-1654/2016] se trata de una mujer indígena, electa como presidenta municipal bajo un sistema mixto de partidos. Este caso versa sobre violencia política de género, con el fin de causar temor e intimidar a la víctima y ser obligada a renunciar. La Sala Superior del Tribunal Electoral señaló, al resolver el presente asunto, debe tener presente que en México se ha visto como práctica recurrente que las mujeres electas para ejercer el cargo de presidentas municipales enfrentan múltiples obstáculos que, en ocasiones culminan con renunciias forzadas, lo que se traduce en una afectación al derecho de participación de las mujeres en la vida política en condiciones reales de igualdad, e invocó diversos instrumentos internacionales que, asegura, reflejan los compromisos del Estado mexicano para logro de la igualdad sustantiva. La Sala Superior considera que, de una interpretación sistemática y funcional, de lo dispuesto en los artículos 1º, párrafo segundo y tercero; 2º, párrafos tercero y cuarto, apartado A; 17, 41, párrafo segundo, base VI; 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Por lo que determinó que la ciudadana Rosa Pérez Pérez, al haber sido presionada por un grupo de inconformes de la comunidad para suscribirla, lo que hizo patente que en el caso no estuvo exento de actos de violencia política de género; por tanto, resulta ineficaz y no puede producir efecto jurídico alguno.

El aporte de la Sala Superior fue el juzgamiento con perspectiva de género. De esta forma estableció que juzgar con perspectiva de género implica materializar el derecho a la igualdad; con ello se responde a una obligación constitucional y convencional de combatir la desigualdad por medio de la función jurisdiccional para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de poder, a través de medidas encaminadas a lograr restituir integralmente a la persona que hubiere sufrido una vulneración a sus derechos humanos.

## **CONCLUSIONES Y PROPUESTA:**

Podemos concluir que aún falta mucho por hacer en el tema, no se puede dejar de lado y se necesita retomarlo de manera recurrente, debido a que es un tema que causa un gran impacto en la sociedad, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para ejercer sus derechos políticos.

Solamente con el establecimiento de políticas públicas se puede lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer, por ello es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia, para reducir los estereotipos que han sido establecidos a lo largo de la historia.

En ese sentido, debe tenerse presente que los actos que impliquen violencia política son conductas que inciden en una vulneración a los derechos constitucionales y convencionales de igualdad y no discriminación, así como al principio constitucional electoral de legalidad.

La falta de una ley específica en México, referente a esta materia, y la falta de un concepto de violencia política, así como su calificación como un ilícito que puede juzgarse en sede administrativa y penal obstaculizan el acceso a la justicia, por ello se debe incorporar en la legislación tomando en cuenta las obligaciones constitucionales y convencionales de las autoridades mexicanas para hacer realidad los derechos políticos de las mujeres, con el fin de prevenir y evitar daños mayores a las víctimas, garantizando el debido proceso, proporcionalidad y equidad.

El Estado está obligado a garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la sociedad, a través de políticas tendientes a enfrentar la desigualdad y la discriminación, esto a través de un diseño institucional no solo legal que permita una disminución y la erradicación de conductas violentas hacia las mujeres en cualquier ámbito en el que se desarrollen.



## **BIBLIOGRAFÍA:**

Bourdieu, Pierre, "La dominación masculina" Editorial Anagrama, Barcelona España, 1999.

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Convención de los Derechos Políticos de la Mujer.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, disponible en: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm>.

Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, disponible en: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D45.pdf>.

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>

Foucault, Michel, "Microfísica del Poder", Madrid, España, La Piqueta, 1978.

Foucault, Michel, Historia de la sexualidad, la voluntad del saber, Siglo XXI, 1998.

Álvarez de Lara et al "Aplicación práctica de los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres: protocolos de actuación" México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Proyecto de Recomendación general N° 28 relativa al artículo 2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Protocolo para Atender de la violencia política contra las Mujeres. Primera edición 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.